

anule una protesta con determinadas solemnidades y por el mismo agraviado, contra el acto que motivare la interposicion del recurso; razon por la cual carece de fundamento la resolucion del Juez de Distrito, que ha negado el amparo de la Justicia federal al C. Acosta, con motivo de no haber formulado por sí mismo, una protesta contra el cobro que ha dado origen á este juicio, ó por medio de otra persona con poder especial para ello.

Considerando: Que conforme á la frac. 1.<sup>a</sup> del art. 112 de la Constitucion federal, los Estados no pueden sin consentimiento del Congreso de la Union, imponer contribuciones ó derechos sobre importaciones y exportaciones.

Considerando: Que no puede entenderse concedido á los Estados ese permiso por la ley de 31 de Mayo de 1872, que derogó los arts. 19 y 83 del Arancel vigente; pues la expresada ley tuvo por objeto exclusivo dejar subsistente el derecho de consumo en el Distrito federal y territorio de la Baja California.

Considerando: Que el derecho de 8 p. S. de consumo, cuyo pago ha exigido al C. Acosta, es en realidad un impuesto sobre importaciones de efectos extranjeros.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitucion de la República, se decreta:

1.<sup>o</sup>: Se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Sonora, en 20 de Agosto del presente año, que declaró no haber lugar al amparo de la Justicia federal, en el presente caso.

2.<sup>o</sup>: La Justicia de la Union ampara y protege al C. Nieves E. Acosta, contra el C. Administrador de Rentas de Guaymas, por el cobro que le hace de doscientos treinta y tres pesos noventa y cinco centavos, como derechos de 8 p. S. de consumo, causados por la internacion al Estado, de ciento veintiocho bultos de efectos extranjeros.

Deyuévanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de

esta sentencia para los fines consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*J. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José G. Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 4 de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Puebla por Laureano Torres, José Regino y Andrés Molina, contra los procedimientos del C. Gefe político de Atlixco que los sentenció á la última pena.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal, en el juicio de amparo promovido por los reos Laureano Torres, José Regino y Andrés Molina, contra el C. Gefe político de Atlixco, por que los sentenció á sufrir la pena capital, supuesto su estado que el de alegar, ante usted dice: que los fundamentos de los quejosos para haber interpuesto el presente recurso, son únicamente los de haberse violado en su perjuicio la garantía que á todo reo concede la frac. 5.<sup>a</sup> del art. 20 de la Constitucion general, pues que habiendo sido opuestas entre sí sus defensas, solo se les nombró por la autoridad responsable un defensor para los tres.

Antes de todo, C. Juez, es necesario advertir, que el delito ó delitos por que se les juzgó y sentenció, fueron los de asalto y homicidio perpetrado en la persona del C. Leo-

nardo Gonzalez, delitos que estan sujetos á las prescripciones terminantes de la ley de 3 de Mayo del año próximo pasado; y que en virtud de esta ley, estan suspendidas algunas garantías individuales, entre ellas las del artículo invocado.

Pues bien, del examen imparcial de la causa remitida por la Gefatura política de Atlixco que es la que instruyó á los reos solicitantes, por los delitos indicados, se viene en conocimiento de que á estos se les procesó en los términos que previene dicha ley, y que los tres nombraron un solo defensor, bajo la circunstancia de que de no admitir el encargo el propuesto, la propia autoridad se los nombrára de oficio.

Así pues sucedió, como se ve á fojas 30 y siguientes de la causa; que notificado el C. Lic. Bernardo Rivadeneyra del nombramiento de defensor que se le hacia á propuesta de los interesados, este se rehusó á desempeñarlo con el pretexto de que tenia que salir de la Ciudad; y entonces fué cuando el Gefe político nombró al C. Procopio Reyes, quien despues que aceptó en forma el nombramiento, hizo cuanto pudo á favor de los reos, con su conocimiento y aprobacion.

Resulta pues, de esas constancias, que los mencionados reos no carecieron de defensor y que este cumplió fielmente con su deber, respecto de todos los que se acogieron á su proteccion, que fueron juzgados por unos mismos delitos, cuales son los de asalto y homicidio.

Luego justificado esto hecho, no es exacto que se haya infringido la frac. 5ª del art. 20 de la Constitucion general, y menos cuando las garantías que él ofrece, estan mandadas suspender esclusivamente para los salteadores y plagiarios, por autoridad legítima y con arreglo á las prevenciones de la propia Constitucion.

Por lo expuesto, el que suscribe creé: que no habiendo violacion de garantías individuales en el caso de que se trata en este juicio, el amparo no puede concederse, por falta de motivo para decretarlo.

Sírvase usted C. Juez, así determinarlo con fundamento del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Puebla de Zaragoza, Julio 30 de 1874.—  
*Eugenio Sanchez.*

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Puebla de Zaragoza, Agosto 6 de 1874.  
—Visto el presente juicio de amparo promovido por los reos Laureano Torres, José Regino y Andrés Molina, contra el procedimiento del C. Gefe político del Distrito de Atlixco, al juzgarlos y sentenciarlos á la última pena, por los delitos de asalto y homicidio, dejándoles sin defensa. Visto el ocurso de queja; el informe justificado de la autoridad responsable; el parecer fiscal y cuanto ha sido de verse.

Considerando: Que resulta probado plenamente que los quejosos han sido juzgados y sentenciados por la Autoridad política de Atlixco, con motivo del asalto que tuvo lugar en la casa del C. Leonardo Gonzalez, Juez de paz del pueblo de Santa Catarina Tepanapa, quien fué asesinado.

Que en su procedimiento, el C. Gefe político, se sujetó á las facultades que le da la ley de 3 de Mayo de 1873, no siendo exacto que los hubiere dejado indefensos, pues consta de la causa que se les nombró defensor, el cual desempeñó el encargo; y que es de atenderse, ademas, á que la garantía que se dice violada en su perjuicio, y que otorga el art. 20 de la Constitucion, está suspensa.

En virtud de lo expuesto, y por no estar comprendido el caso en los que determina el art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, reglamentaria de los arts. 101 y 102 de la Constitucion, se declara:

Que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los reos Laureano Torres, José Regino y Andrés Molina, contra los procedimientos del C. Gefe político de Atlixco, al haberlos juzgado y sentenciado á la últi-

ma pena por los delitos de asalto y homicidio.

Hágase saber; publíquese esta resolución en la forma prescrita y remítase el expediente á la Suprema Corte de Justicia para la revision.

El C. Juez de Distrito, definitivamente juzgando, lo proveyó, mandó y firmó.—*Antonio Rivero*.—Ante mí, *Antonio García Mozqueira*.

Es copia que certifico, para su insercion en el Semanario Judicial de la Federacion.—Puebla, Agosto 7 de 1874.—*Antonio G. Mozqueira*.

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Octubre 29 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Puebla, por Laureano Torres, José Regino y Andrés Molina, contra los procedimientos del C. Gefe político de Atlixco que los sentenció á la última pena, como salteadores. Visto el informe justificado de la autoridad responsable; el parecer fiscal; la sentencia del Juez de Distrito y

Considerando: Que aunque no están suspendidas las garantías que otorga el art. 20 frac. 1º de la Constitucion federal, sino antes bien expresamente consignadas en la ley de salteadores y plagiarios, la escepcion hecha en favor del derecho inviolable de defensa, aparece de las constancias de autos que usaron de ese derecho los solicitantes, siendo enteramente voluntario, de su parte, el nombramiento de un solo abogado para los tres, y no existiendo, por consiguiente, la infraccion constitucional alegada.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitucion, se declara:

Que es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito que negó el amparo á los quejosos.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su

origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así, por mayoría de votos, lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias*.—*M. Auza*.—*José M. Lozano*.—*José Arteaga*.—*Ignacio Ramírez*.—*M. de Castañeda y Nájera*.—*Ignacio M. Altamirano*.—*Luis Velasquez*.—*M. Zavala*.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

Es copia que certifico. México, Noviembre 16 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por los Sres. Elorza y Mendía, contra el Administrador de rentas de Mazatlan, que se niega á recibirles varias cantidades en moneda de cobre, por pago de contribuciones, causadas por introduccion de efectos.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal ha examinado este expediente que contiene tres diversos juicios de amparo, promovidos por los Sres. Elorza y Mendía de este comercio, contra los actos del C. Administrador de la Aduana terrestre, que por medio de la facultad coactiva les exige el pago de setecientos ochenta y ocho pesos sesenta y cinco centavos, que causaron por su giro mercantil y mercancías nacionales, venidas á su consignacion, con mas, los recargos de cobranza que importan ciento un pesos noventa y un centavos, negándose á admitir dicho pago en moneda de cobre, de la emitida por la casa de moneda de Culiacan.